



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-005-2019-00026-01 (O2-22-313)
Accionante: ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Accionada: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 092
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ – RELIQUIDACION INDEMNIZACIÓN

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-005-2019-00026-01 (O2-22-313), instaurado por ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ en contra de la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante y COLPENSIONES E.I.C.E., así como también el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta última administradora, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 29 de julio de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA - JRCIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ – JNCI y COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de que se declare la nulidad de los dictámenes núms. 069449-2017 del 29-11-2017 y 71185625-8908 del 19-06-2018, emitidos por la JRCIA y la JNCI, respectivamente, y en consecuencia obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen laboral a partir del 27 de diciembre de 2016 a cargo de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. De igual manera, reclama el pago de los intereses de mora sobre las mesadas pensionales adeudadas o en subsidio, la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones sostiene que el 26 de marzo de 2012 sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba sus servicios a favor de la empresa Seguridad Baluarte CTA, ello por razón de que un compañero de trabajo le propinó varios golpes con una “*macana*” en el codo derecho y el cráneo, produciéndole pérdida de la conciencia, traumatismos múltiples y contusión en codo. Acota que le fueron practicados diferentes exámenes médicos, tales como tomografía axial contrastada y estudio de resonancia magnética, los que arrojaron como diagnóstico: trastorno del disco cervical con radiculopatía, cervicobraquialgia, quistes periradiculares, dolor crónico intratable, depresión y dolor en la zona escapular del hombro izquierdo.

Informó que, la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., donde se encontraba afiliado para riesgos laborales, el día 16 de julio de 2016, emitió el dictamen núm. 1357604, “...*determinando como de origen común las secuelas padecidas por el actor, sin embargo, dado que hubo recurso, mediante dictamen Nro. JRCIA S.1. Nro. 12772-16 del 08 de septiembre de 2016 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, califica como de origen laboral el trauma de cráneo y la herida en la cabeza*”; aclarando que de manera posterior, la sociedad aseguradora emite un segundo dictamen el 08 de junio de 2017 “...*con el cual determina que el señor Hernández Gutiérrez presenta herida del cuero cabelludo, traumatismo de la cabeza, cefalea postraumática crónica, trastorno de adaptación, contusión de codo con origen profesional, y para otras degeneraciones y la radiculopatía padecida le asigna origen común, califica en total al actor con un 19,80% de pérdida permanente de la capacidad estructurada al 18 de abril de 2017*”.

Frente a este segundo dictamen, aseguró que formuló la impugnación respectiva para ante la JRCIA¹ y la JNCI², disenso que fue desatado por los organismos calificadores en dictámenes

¹ La JRCIA otorgó una PCL del 48,38% de origen común y FE 18 de abril de 2017.

² La JNCI otorgó una PCL del 19,78% de origen común y FE 18 de abril de 2017

núms. 068449-2017 del 29-11-2017 y 71185625-8908 del 19-06-2018 respectivamente. Dadas las resultas de la valoración técnica antes reseñada, acudió a la Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública para ser examinado por uno de los profesionales allí adscritos, entidad que el 30 de julio de 2018 concluyó que se acreditaba un estado de invalidez de origen laboral con una PCL del 55,45% y fijando como data de estructuración el 27 de diciembre de 2016.

Por lo que insiste en defender la eficacia y validez del dictamen practicado por la Universidad de Antioquia, razonando que: *“[e]n los antecedentes clínicos del demandante no existe anotación alguna sobre padecimientos de radiculopatía y trastorno de discos y que fueron calificados por la Facultad Nacional de Salud Pública en el dictamen que se acerca, pues ellos corresponden a secuelas directas de las lesiones producidas en la integridad personal del demandante con ocasión del accidente de trabajo, por lo que erraron los dictámenes emanados al establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del(sic) y el origen del trastornos de discos intervertebrales y la radiculopatía sobrevinientes en la afectada salud del demandante”*. Finalmente, acota que la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. le reconoció la indemnización por incapacidad permanente parcial con base en una PCL del 19,8%

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 04 de febrero de 2019 (pág.629 y 630, doc.01, carp.01), y se notificó a las demandadas POSITIVA S.A. y JRCIA el 06 de febrero y el 12 de abril de 2019 (págs. 631 y 747, doc.01, carp.01); teniéndose por notificada por conducta concluyente a la JNCI en auto del 08 de julio de 2019 (págs.853 a 854, doc.01, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 06 de febrero de 2019 (págs.633 a 634, doc.01, carp.01).

POSITIVA S.A., al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptó como ciertos los hechos que hacen referencia al accidente de trabajo sufrido por el actor, los resultados del TAC que le fue practicado, su afiliación para riesgos laborales, los dictámenes de PCL emitidos y el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial; sosteniendo que los demás hechos no le constaban o no eran ciertos. Como excepciones de fondo, postuló las de dictamen en firme, inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin justa causa, prescripción y la genérica (págs.679 a 724, doc.04, carp.01).

Las juntas calificadoras plantearon al unísono oposición a las reclamaciones impetradas en su contra, presentando como sustento a la misma las excepciones de mérito que denominaron

como inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones, legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, inexistencia de proceso de calificación para la valoración integral de la pérdida de capacidad laboral, debido proceso, la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la junta nacional exime de responsabilidad a la entidad, improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, competencia del Juez Laboral, buena fe de la parte demandada y la genérica (págs.753 a 757 y 767 a 840, doc.01, carp.01).

En proveído del 29 de julio de 2021 se vinculó a la controversia a COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.31, carp.01), entidad que luego de tener por cierta la afiliación del actor a POSITIVA S.A., junto con el contenido de los dictámenes emitidos por las entidades competentes y la indemnización por incapacidad permanente parcial pagada, se opuso a la prosperidad de los pedimentos con la formulación de las excepciones perentorias de inexistencia de deber de declarar nulo el dictamen de pérdida de capacidad laboral, inexistencia en el reconocimiento y pago la pensión de invalidez y retroactivo por falta de requisitos legales Ley 860 de 2003, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, descuentos del retroactivo por salud y la genérica (doc.38, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 29 de julio de 2022 (docs.59 a 61, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió que *“ARGEMIRO HERNANDEZ GUTIERREZ, con CC No. 70.562.103, cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 56.0%, estructurada el 03 de noviembre de 2020, por causas de origen común, tal y como lo determino(sic) la UNIVERSIDAD CES en el dictamen del 3 de noviembre de 2020”, y con ello, “...ordenar el reconocimiento y pago de la Pensión de Invalidez que consagra el artículo 01 de la Ley 860 de 2003, prestación que se causó a partir del 3 de noviembre de 2020, en cuantía equivalente a 1 smlmv, y por concepto de 13 mesadas al año”* (minuto 01:16 a 59:14, doc.60, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial del señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda a los pedimentos consignados en los acápites pertinentes del libelo genitor. Para los anteriores propósitos, defiende lo conceptuado por el médico de la UdeA, resaltando que a su juicio no existe prueba indicativa que determine el

origen común de las patologías del accionante, y considera improcedente acudir a las dudas que se muestran en la calificación de algunas patologías para definir que las mismas no son de origen laboral. Señala que a través de la ratificación del dictamen que hizo el perito médico de la UdeA se estableció que todos los padecimientos de su prohijado son de origen laboral y pueden derivarse del accidente de trabajo que sufrió en el año 2012.

Así también, explica que la simple posibilidad de que los padecimientos del actor puedan ser por otras circunstancias no desvirtúa la calificación de la UdeA, insistiendo en que se acojan esas conclusiones y se condene a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen laboral (minuto 59:21 a 01:05:43, doc.60, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. reiteró lo expuesto en los alegatos de conclusión, solicitando que se modifique la sentencia y se acoja el dictamen elaborado por la JNCI en mayo de 2022, por haber sido emitido en vigencia del proceso (minuto 01:06:05 a 01:08:21, doc.60, carp.01).

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos que no fueron objeto de alzada.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación y el grado jurisdicción de consulta en favor de la administradora del RPMPD, se admitieron el 05 de septiembre de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 12 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El promotor de la litis (doc.04, carp.02), advirtió que *“al señor Argemiro se le practicó una Tomografía Axial Contrastada de cráneo el día del accidente con el siguiente resultado: - “presencia de hematoma de tejidos blandos epicraneos frontoparietales derecho con enfisema subcutáneo, con fragmento óseo adyacente”, lo que puede informarnos de la fuerza y contundencia del golpe. A la hora 1:34:48 el Dr. Jaime León le explica al Juez cuando el Juez le indaga sobre la presencia de un “chichón” y su relación con la radiculopatía, claramente lo explica el galeno, que debe tenerse por aclarado el mecanismo del accidente, golpes fuertes y su angulación y la transmisión de la energía hacía la columna cervical, que si bien a nivel de cabeza hubo un “chichón” ello no era óbice para que se produjera la radiculopatía”. (...)*

“[Q]ue el art. 18 de la Ley 1562 de 2012, fijó un procedimiento especial para establecer la pérdida de capacidad laboral de una persona, así como otorgó competencia a las juntas de calificación de invalidez, para que, con apego en los criterios de orden técnico y científico contenidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez, emitan la prueba idónea tendiente a demostrar tal condición. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que se le haya provisto a los dictámenes emanados de dichas juntas la condición de prueba solemne o ad substantiam actus, pues los jueces de instancia están legitimados, con fundamento en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para sopesar o darle mayor valor a otras pruebas que hubieran sido aportadas al proceso y, con base en ellas, forjar su convencimiento sobre la realidad fáctica que se discute, ya que no está sometido a la tarifa legal de prueba. (ver sentencias Sentencias SL24392 de 2005, SL2756 de 2020 radicado 72895.)

Es así, que el dictamen aportado y sustentado por el Dr. Jaime León Londoño Pimienta, se encuentra debidamente sustentado técnica y científicamente, y es el que se debió tener en cuenta para la resolución de la litis”.

El vocero judicial de POSITIVA S.A. (doc.05, carp.02), presentó alegaciones, en las que solicita que se confirme la decisión proferida por el *a quo*, dado que, a su juicio y conforme con las probanzas allegadas, la pertinencia de la valoración médica del estado de salud del actor realizado por el CENDES no fue desvirtuada, *“tan sólo complementada por otras patologías que entonces no pudieron ser tenidas en cuenta”*, debiéndose mantener indemne a *“Positiva de las pretensiones consecuenciales a la solicitud de nulidad contenidas en la demanda, dado el origen de la patología invalidante”*.

El poderhabiente judicial de COLPENSIONES E.I.C.E (doc.06, carp.02), solicitó la revocatoria del derecho reconocido en primera instancia, aduciendo que *“...el demandante no acredita el requisito del porcentaje de la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, por cuanto incluso ya la ARL POSITIVA S.A., toda vez que su pérdida de capacidad es del 19.80%, confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Sin que a la fecha se haya presentado calificación alguna por parte de Colpensiones, por lo que se deben considerar validos los dictámenes emitidos previo al inicio del proceso laboral, por haberse realizado en pleno cumplimiento de la norma”*.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ y COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad

con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada además de ocuparse de los puntos de inconformidad materia de alzada, se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., en los puntos en los que no fue objeto de impugnación.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen laboral a partir del 27 de diciembre de 2016, efecto para el que será necesario establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debe acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Asimismo, la Sala se ocupará en determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos y conforme a los principios que informan la sana crítica.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará decisión de primer grado, considerando que el promotor no demostró con la debida suficiencia que para el año 2016, se encontraba en estado de invalidez con una PCL superior al 50%, así tampoco el origen laboral de las patologías que padece, a la vez que, como resultado del ejercicio de la libre formación del convencimiento en la apreciación de la prueba pericial allegada con la demanda y expedida por la Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública, se desestimó la fuerza demostrativa de este medio de convicción, no habiendo por tanto mérito para modificar la fecha de estructuración o bien el origen determinados por el *a quo*.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el actor sufrió un accidente de trabajo el 26-03-2012 (pág.29, doc.01, carp.01); que POSITIVA S.A. 08-06-2017 calificó la PCL del actor en un 19,8%, tomando como FE el 18-04-2017 y determinando su origen como laboral (págs.31 a 42 doc.01, carp.01); que la JRCIA y la JNCI, adoptaron, en su orden, una PCL igual al 48,38% y 19,8%, manteniendo la fecha de estructuración y el origen fijado por POSITIVA S.A. (págs.45 a 56, doc.01, carp.01; págs.57 a 66, doc.01, carp.01), y que la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 30-07-2018 determinó que el actor presentaba un 55,45% de PCL de origen laboral, estado que se indicó se estructuró a partir del 27-12-2016 (págs.67 a 77, doc.01, carp.01).

2.3.1. La calificación de la pérdida de capacidad laboral

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguro que asuma lo riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, presentara reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen “...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. -Negritas intencionales de la Sala-

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto “Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías” (SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando

con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

2.3.2 Del Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, se tiene que el censor postuló como argumento axial de la decisión hoy criticada, la fuerza demostrativa del dictamen de PCL que fuera elaborado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, refutando con ello las inferencias a las que arribó el juzgador de primer nivel apoyado en la valoración técnica desplegada por el profesional de la medicina adscrito al CENDES.

Llegado a este punto, se impone recordar que con la demanda fueron aportados además los dictámenes emitidos por la sociedad POSITIVA SA y las juntas calificadoras, experticias que dada su trascendencia en el asunto la Sala, las sintetiza así:

Nro. dictamen	Fecha de valoración	Entidad calificadora	Manual de calificación de invalidez	PCL otorgado	FE	Origen	Diagnóstico / patologías calificadas	Pág(s) del doc.01, carp.01	Observaciones
1121705	8/06/2017	Positiva Compañía de Seguros S.A.	Decreto 1507 de 2014	19,80%	18/04/2017	Accidente de trabajo	Herida del cuero cabelludo; traumatismo de la cabeza, cefalea postraumática crónica; trastornos de adaptación; contusión de codo; otras degeneraciones; radiculopatía	31 a 42	Los diagnósticos de herida del cuero cabelludo, traumatismo de la cabeza, cefalea postraumática crónica, trastornos de adaptación y la contusión del codo, fueron calificados de origen laboral. Las restantes como de origen común.
068449-2017	29/11/2017	JRCIA	Decreto 1507 de 2014	48,38%	18/04/2017	Accidente de trabajo	Cefalea postraumática crónica, secuelas de traumatismo intracraneal, trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía y trastornos de adaptación.	45 a 56	Los diagnósticos de cefalea postraumática crónica, secuelas de traumatismo intracraneal y trastornos de adaptación fueron calificados de origen laboral. Los restantes como de origen común.
71185625-8908	19/06/2018	JNCI	Decreto 1507 de 2014	19,80%	18/04/2017	Accidente de trabajo	Cefalea postraumática crónica, secuelas de traumatismo intracraneal, trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía y trastornos de adaptación.	57 a 66	Los diagnósticos de cefalea postraumática crónica, secuelas de traumatismo intracraneal y trastornos de adaptación fueron calificados de origen laboral. Los restantes como de origen común.
NA	30/07/2018	Universidad de Antioquia - Facultad Nacional de Salud Pública	Decreto 1507 de 2014	55,45%	27/12/2016	Accidente de trabajo	Secuelas de traumatismo intracraneal, cervicalgia, cefalea pos traumática, fibromialgia, trastorno de adaptación, trastorno de discos intervertebrales, radiculopatía y dolor clínico intratable	67 a 77	Para la FE se apoyó en la data en que le fue expedido el concepto de rehabilitación no favorable.

En este sendero, revisada la pericia técnica efectuada al señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ por parte de UdeA y que constituye el argumento principal de la censura, encuentra la Sala que se tuvieron en cuenta como *diagnósticos* “*i. Secuelas de traumatismo intracerebral; ii. Cervicalgia; iii. Cefalea pos traumática; iv. Fibromialgia; v. Trastorno de adaptación; vi. Trastorno de discos intervertebrales; vii. Radiculopatía, y; vii. Dolor crónico intratable*”; no sin antes fijar como fecha de estructuración el 27 de diciembre de 2016, data de “*...la valoración que realiza el ortopedista de la Nueva Clínica del Sagrado Corazón, con pronóstico no favorable de recuperación*”.

Asimismo, el evaluador consignó como observaciones que se trataba de un “[p]aciente en la sexta década de la vida, oficio Vigilante, a quien un compañero de trabajo, por un altercado, le propina un «palazo» en la cabeza región fronto temporal el 23/06/2016, presentando un TEC, al poco tiempo empieza a presentar cefalea intensa tipo migraña y pérdida de la fuerza del miembro superior izquierdo progresiva la RNM reportó trastorno de discos intervertebrales a nivel de C4-C5. Le tomaron EMG que reportó lesión antigua de raíz C5. Está en manejo por Psiquiatría –psicología por trastornos conductuales y en clínica del dolor por dolor crónico con clínica de fibromialgia”.

En la sustentación y para la contradicción de la mentada experticia, se presentó el profesional de la medicina Jaime León Londoño Pimiento quien manifestó que es médico especialista en salud ocupacional del CES desde el año 1994 y desde el 2014 es miembro calificador de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Recordó que, valoró de manera presencial al pretensor el 30 de julio de 2018, oportunidad en la que lo identificó, estableció de manera sucinta su historial laboral y creó la respectiva historia clínica, en donde se consignó además de la enfermedad actual (cervicalgia, fibromialgia y dolor crónico intratable), sus antecedentes personales y familiares. Para efectos de rendir el dictamen y arribar las conclusiones allí vertidas, adujo que practicó una evaluación física y verificó los documentos que le aportó el paciente, para posteriormente extraer los datos más relevantes de cara a lo previsto por el Decreto 1507 de 2014. Afirmó que, de acuerdo con los resultados de la valoración documental y física, encontró que el señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ contaba con una PCL del 55,45%, estableciendo el 27 de diciembre de 2016 como fecha de estructuración, la que se relaciona con el concepto médico de rehabilitación desfavorable.

Refiere que el actor sufrió un accidente de trabajo producto de un golpe con un objeto contundente en la cabeza y una de sus extremidades. Afirmó que, entre cinco o seis meses posteriores al evento traumático, el deprecante presentó trastornos del comportamiento y osteomusculares, desviación lateral de la cabeza, radiculopatía y una lesión de los nervios braquiales, así también de otras patologías asociadas al trauma. Menciona que las secuelas derivadas de la lesión corresponden a una cefalea crónica y un trastorno adaptativo de ansiedad y depresión. Al momento de dar respuesta a las interrogantes del *a quo* en lo que incumbe a la identificación de la prueba científica que dio cuenta de la aparición de los trastornos de comportamiento y osteomusculares, advirtió que se apoyó en los resultados de una consulta por psiquiatría a la que asistió el demandante, aclarando no obstante que, tales resultados corresponden al relato del paciente cuando fue atendido por esa especialidad, sin contar con ayudas diagnósticas de soporte, como lo sería, por ejemplo, una evaluación

neuropsicológica. Aseveró a su vez que, la fibromialgia y la desviación a la altura de la cabeza del señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ no guarda relación con el accidente de trabajo.

Últimamente, estimó que el trastorno de adaptación (ansiedad y depresión) que padece el accionante tiene un origen multifactorial, y es por ello que no puede asegurar que tuvo su génesis directa en el accidente sufrido en el año 2012, al igual que la patología de radiculopatía en el miembro superior izquierdo. Al final, sostuvo que calificó el estado de invalidez como de origen laboral asumiendo como secuelas del accidente de trabajo padecido en el 2012, las enfermedades que actualmente padece el pretensor.

Por otra parte, el profesional de la medicina José Manuel Méndez Carballo, quien valga decir, se encuentra vinculado al CENDES, concluyó en la dictamen técnico-científico que se le encomendó por el *a quo* que, las patologías de trastorno depresivo moderado, osteoartrosis cervical con radiculopatía y cefalea postraumática eran de origen común, estableciendo por un lado la PCL en un 56% y de otro, el 03 de noviembre de 2022 como hito de estructuración.

En la sustentación de la ponencia, el médico calificador planteó que:

*“Los estudios de TAC y RMN cerebral realizadas a lo largo de la evolución de su evento, descartan lesión cerebral o hallazgos que puedan explicar su hemiparesia izquierda. **El examen físico es muy difícil por las quejas de dolor permanente del trabajador, lo que imposibilita la exploración de los diferentes órganos y sistemas.** Su cervicobraquialgia izquierda puede ser explicada por la patología degenerativa de columna cervical. **La gran mayoría de su cuadro doloroso global puede ser explicado por la Fibromialgia, que es una enfermedad sin ninguna relación de causalidad laboral.**”*

*Es importante tener en cuenta el concepto del Fisiatra tratante, que indica que **el desorden postural global por actitud antálgica de desviación de todo el cuerpo hacia la derecha con marcha antálgica, lo predispone a alteraciones de la biomecánica de la musculatura de la columna y la hemiparesia izquierda**” referenciada no es realmente una hemiparesia como tal, sino que el dolor no le permite la movilidad completa de las articulaciones sumadas a las radiculopatías presentando por ende la debilidad muscular y su cuadro global ya está en una fase de secuelas.*

CONSIDERACIONES ACERCA DEL CUADRO DEPRESIVO: Su trastorno depresivo moderado es multifactorial y no hay evidencias que permitan establecer una relación con el evento aceptado como Accidente de Trabajo, por lo que debemos considerarlo como de origen común y su largo periodo de incapacidad médica y alejamiento del medio laboral, conlleva un pobre pronóstico de reintegro laboral exitoso. A la fecha no hay realización de pruebas neuropsicológicas que demuestren el compromiso cognitivo, evidenciado en la evolución clínica de su cuadro depresivo.

*En el expediente solo hay dos notas medicas del 26/03/12, día del A de T y luego pasa al 08-11-2015, en que consulta por dolor en hombro izquierdo de 3 meses de evolución, **es decir hay un vacío de 44 meses sin historia clínica postevento, sin que haya una explicación para ello.***

Al existir dos diagnósticos del Eje I en psiquiatría, se elige el de mayor deficiencia.

CRITERIOS PARA DEFINIR EL ORIGEN: Para la definición de origen, se tiene en cuenta que el mayor peso etiológico y la enfermedad que desborda el 50% de PCL entre ambos orígenes, es la enfermedad común, por lo tanto, se aplica la Sentencia T518 de 2011

Llegado a este punto, se impone recordar que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, el cual señala:

“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

Significa lo anterior que, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en el dictamen emitido por el CENDES el 17 de noviembre de 2020. Ello, en atención a que el médico calificador en dicho dictamen, justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el origen de las patologías y la fecha de estructuración de las enfermedades que padece el accionante, tomando, entre otros, como elementos demostrativos la historia clínica y certificados de salud que reposan en el cartulario, el “...examen médico orientado a valorar el daño existente realizado en las instalaciones del CENDES” y lo delineado por el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional -Decreto 1507 de 2014-.

Cumple destacar que, en lo que respecta al origen del estado de invalidez de ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, la Sala coincide con el resultado de la valoración del dictamen del CENDES, en tanto es la que mejor sustenta, con grado de certeza, el estado de salud del actor. Nótese que el médico adscrito a la UdeA, reconoció que basó el origen del estado de invalidez del actor asumiendo que las demás patologías que presenta aquel son secuelas del accidente de trabajo, empero, reconoció en vista pública que carece de evidencia técnica o científica para sostener que la fibromialgia, la radiculopatía y el trastorno de adaptación ciertamente eran consecuencia del accidente de trabajo. Lo expuesto, deviene útil para descubrir una imprecisión en el ejercicio de valoración del médico calificador de la UdeA, quien le otorgó un mayor valor a factores y enfermedades de las que no hay evidencia para sostener que guardaban relación con el accidente de trabajo padecido en el año 2012, resaltando la Sala que, como bien se indicó en la valoración desarrollada por el CENDES, “[e]n el expediente solo hay dos notas medicas del 26/03/12, día del A de T y luego pasa al 08-11-2015, en que

consulta por dolor en hombro izquierdo de 3 meses de evolución, es decir hay un vacío de 44 meses sin historia clínica postevento, sin que haya una explicación para ello”.

En ese contexto, traslúcido se muestra la infracción a lo ha adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en punto a la calificación integral, pues “[c]uando concurren eventos de una y otra naturaleza -común y profesional en la determinación de la pérdida de capacidad laboral que conduzca a una pensión de invalidez, para establecer el origen y la fecha de estructuración, se atenderá al factor que, cronológicamente, sea determinante para que la persona llegue al porcentaje de invalidez. **Cuando se trate de factores que se desarrollen simultáneamente, para determinar el origen y la fecha de estructuración se atenderá al factor de mayor peso porcentual**³”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

De ahí que, la Sala se aparte diametralmente de las consideraciones expuestas por el médico evaluador del dictamen adosado con el libelo introductorio, quien considera, en líneas generales, que el estado de invalidez del accionante es de origen laboral, por cuanto además de soportar su conclusión en el dicho del paciente y no en la totalidad de la historia clínica, no se apoyó en exámenes diagnósticos y demás pruebas técnicas pertinentes para calificar, en abierta infracción a los preceptos regulativos de esta materia.

Las consideraciones referidas son suficientes para desmerecer también el dictamen del 19 de mayo de 2022 proferido por la JNCI y que arrojó un PCL el 52,72%, pues no responde al estado actual del paciente ni a las directrices que de la calificación integral ha discurrido la Corte Constitucional en sentencias C-425 de 2005 y T-518 de 2011 cuando el paciente padece más de una patología con origen disímil.

De tal suerte que, para la Sala, no se equivocó el sentenciador de primer nivel al acoger las inferencias vertidas en el dictamen pericial emitido por el CENDES, toda vez que, **i.** Valoró el estado actual del paciente y el origen de las patologías que padece el impulsor, apoyándose estrictamente en la historia clínica y exámenes médicos que le fueran suministrados; **ii.** No presumió ni atribuyó el carácter de secuelas derivadas del accidente de trabajo sin la respectiva evidencia científica y, **iii.** Se ajustó a las directrices que frente a la calificación integral ha aquilatado la Corte Constitucional; y siendo ello así, se impone confirmar la decisión confutada.

2.3.3. De la Pensión de Invalidez

³ CSJ SL3008 de 2022.

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, Preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne al fin último de la prestación económica que se deriva del riesgo de invalidez con ocasión de la materialización de una contingencia de origen común ora de origen laboral, la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia ha puntualizado en sentencias SL3275 de 2019 y SL3873 de 2022 que, aquella está *“destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo”*; previo, desde luego, al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para su causación y disfrute.

Así se desprende de lo asentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables para resolver el reconocimiento de esta prestación de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Refiere la Sala lo anterior, para recalcar que en el *sub lite* el derecho pensional que se dispensó a favor del señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ encuentra venero en la valoración técnica del CENDES (doc.10, carp.01), el cual fijó como fecha de estructuración el 03 de noviembre de 2020, lo que de suyo implica que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez, en principio, se encuentran contenidas, para el caso del RPMPD en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003.

En aplicación de las premisas normativas que gobiernan las aspiraciones del actor, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: **i.** Padecer un estado de invalidez, o lo que es lo mismo, haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente (artículo 38, Ley 100 de 1993), y **ii.** Que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Así pues, refulge palmar la prueba del estado de invalidez como primer presupuesto al que se hizo mención en el punto retropróximo, teniendo en cuenta una PCL de 56% que le fuera asignada al convocante en el dictamen que en esta oportunidad se le otorgó plenos efectos. De igual manera en el *sub litium*, constituye un hecho irrefutable que el demandante durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, por el lapso comprendido entre el 03 de noviembre de 2017 y el 03 de noviembre de 2020 acreditó un total de 154,3 semanas cotizadas (doc. GRP-SCH-HL-66554443332211_2098-20211007082725, subcarp.39, carp.01), cumpliendo con suficiencia los lineamientos para ser destinatario de la pensión por invalidez a partir del 03 de noviembre de 2020 a cargo de la COLPENSIONES E.I.C.E, administradora a la que se encuentra afiliado.

2.3.4. La liquidación de la pensión de invalidez

La pensión de invalidez se liquida con el promedio de los salarios o rentas sobre los que cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo, si este fuere inferior, o si hubiere cotizado más de 1.250 semanas, según le resulte más favorable (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y con el 45% del ingreso base de liquidación, más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 500, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% e inferior al 66%, o con el 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 800, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 66%, sin que pueda ser superior al 75% del ingreso base de liquidación, ni inferior al salario mínimo legal vigente (artículo 40 de la Ley 100 de 1993). Para calcular el ingreso base de liquidación, la Sala encuentra que, dado el valor porcentual del estado de invalidez, es menester fijar la cuantía pensional en un 45% del IBL, la que debe ajustarse a un salario mínimo legal mensual vigente como así lo estableció el *a quo*.

En el mismo sentido, se denota que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, toda vez que, el derecho a la pensión por invalidez se hizo exigible con la declaratoria formal del dictamen practicado durante el tracto procesal el

pasado 17 de noviembre de 2020 y la demanda fue presentada el 18 de enero de 2019, y por ende, no transcurrió el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Adicionalmente, se vislumbra que, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual COLPENSIONES E.I.C.E. está autorizada para descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los aportes para el Sistema General de Salud.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, tanto más cuanto que, determinó acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ y a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E., tomando como sustrato el dictamen de PCL emanado del CENDES el 17 de noviembre de 2020.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y advirtiéndole que el recurso de apelación interpuesto por el señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ no salió adelante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho de manera proporcional y en favor de las demandadas, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E. conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

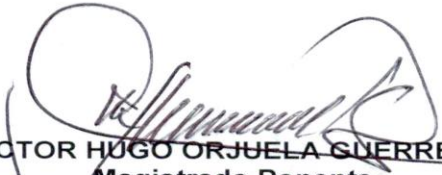
SEGUDO: COSTAS en esta instancia a cargo del señor ARGEMIRO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, fijándose como agencias en derecho, en favor de las demandadas POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de un SMMLV equivalente a \$1.160.000, en proporción de un 25% de este valor para cada una de ellas

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario